

La memoria de Salamanca y la democracia como tarea



El 24 de marzo de 1976, el mismo día que se instauró la dictadura genocida, el dirigente sindical René Rufino Salamanca fue secuestrado por fuerzas represivas. Alojado en el Campo clandestino de detención de La Perla (Córdoba), no más de treinta días después sufrió el destino de los otros/as más de dos millares de militantes alojados en ese predio militar, según se reveló en el juicio del 2016 que condenó a sus asesinos.

La Comisión Permanente de Homenaje a René Salamanca, como todos los años, realizó el acto de recordación el día del trabajador mecánico, en la plazoleta de la Rotonda que lleva su nombre, al ingreso de la fábrica Renault, donde fue obrero y delegado sindical. Este año también fui invitado a compartir, en forma virtual, una reflexión como desde hace dieciséis años, cuando inauguramos – en mi caso como Director de Derechos Humanos de Córdoba - la

Plazoleta René Salamanca y el monolito que perpetúa su memoria, como mojón importante de la lucha de los trabajadores cordobeses por sus derechos, precisamente en el lugar que fue escenario de tantas concentraciones de los obreros mecánicos.

Salamanca tenía 36 años cuando lo secuestraron. Nacido en el interior provincial, trabajó como obrero metalúrgico en fábricas de la ciudad de Córdoba, donde también constituyó su familia. Participó de la agrupación gremial Felipe Vallese, con militantes peronistas y de izquierda. A fines de los años 60 se sumó al PCR (Partido Comunista Revolucionario), del que llegó a ser destacado dirigente. Después del Cordobazo, en noviembre de 1969 ingresó como obrero de Ika-Renault, donde fue delegado hasta que en 1972 lo eligieron Secretario General del sindicato de los mecánicos, el SMATA, siendo reelegido en 1974 con la lista

La memoria de Salamanca y la democracia como tarea

Marrón que encabezaba.

A 45 años de aquel 24 de marzo, y la ya larga marcha democrática desde 1983, me pareció oportuno traer a la memoria las cartas que el dirigente sindical Salamanca escribió a los trabajadores instando a defender el gobierno democrático, la última, dos días antes del golpe militar. No alcanzó con su voluntad y su prédica en esa defensa, pero la advertencia merece reivindicarse, especialmente por las dolorosas consecuencias para el pueblo pobre y trabajador. Es cierto que para una defensa real y concreta que impidiera el golpe de estado, se necesitaba una correlación de fuerzas diferente, mucho más favorable, con capacidad real de asumir en los hechos la defensa de las instituciones democráticas, más allá de las debilidades demostradas por las autoridades que las gobernaban. Quizás la más dramática y paradójica expresión de aquel grito en soledad del dirigente sindical y militante político fue su secuestro el mismo día que el terrorismo de estado ponía fin al gobierno democrático.

Aquellas cartas motivan una actualizada reflexión sobre la democracia que tenemos y la que debemos construir. Sin duda que a partir de 1983 hubo una revalorización de las formas y las instituciones democráticas, que pocas veces los sectores populares experimentaron como beneficiosas a sus intereses. Salta a la vista que los principales beneficiarios tanto del terrorismo de estado como de la democracia formal a lo

largo de nuestra historia nacional, salvo contados períodos populares, resultaron los poderosos grupos económicos, que todavía ejercen con violencia los poderes fácticos en nuestro país. Afirmar esta realidad no significa dejar de valorar los avances que el ejercicio de la democracia constitucional ha posibilitado a favor de los sectores populares. Porque aún con sus limitaciones que a veces son demasiadas, el pueblo puede lograr restitución de derechos conculcados y conquista de nuevas reivindicaciones. El ejercicio electoral, que también acumula vicios de la mala política, hace posible a la vez la gestión de políticas favorables, especialmente cuando las organizaciones sociales pueden plasmar sus necesidades y reclamos en respuestas concretas de justicia social y mayor dignidad.

En este escenario contradictorio y conflictivo, alejado de los análisis puristas y esquemáticos, la democracia real es también una tarea popular, por más que mezquinos intereses se esmeren por ensuciarla con sus conductas corruptas, elitistas y rosqueras, para marginar el involucramiento del pueblo.

La construcción de la democracia, aún con las restricciones de los sistemas electorales y de partidos políticos generalmente cerrados a la participación de sus afiliados, se plantea como tarea popular porque es la posibilidad de ejercer el poder social. No es una tarea menor. Los eternos beneficiarios de dictaduras y democracias han demonizado tam-

bién al poder, para que nadie se los dispute y puedan ejercerlo en su exclusivo beneficio.

La tarea popular de construir la democracia real implica fortalecer las propias organizaciones sociales que aglutinan las demandas más urgentes. Y en esas tareas basadas en la solidaridad, saber articular con otras agrupaciones y movimientos, que hagan crecer el peso social para disputar los espacios políticos en la gestión del estado. No como simples beneficiarios, sino como protagonistas reales en la definición de las políticas que directa o indirectamente tienen que ver con la construcción de un país soberano, libre y con justicia social. Ninguna de las llamadas “grandes” políticas es ajena a la peor o mejor calidad de vida de los empobrecidos por el sistema capitalista. La disputa es integral, en todas las instancias de decisión política, aunque los logros requieran de procesos a veces más largos y complejos que lo deseable. Es posible hacer el camino de acumulación de poder si se consolida la participación popular en sus propias organizaciones, crecen en autonomía y se fortalecen en la articulación de movimientos. Y en ese andar los sectores populares deben experimentar resultados positivos. No alcanza con declamar necesidades ni repetir consignas válidas, pero desgastadas por la imposibilidad concreta de plasmarlas en la realidad, como sucede en algunos grupos políticos, que acaban cayendo en un ineficaz sectarismo, aún con su loable intención de ser benefi-

ciosos a los trabajadores y al pueblo.

Los reducidos pero poderosos sectores acaparadores de bienes y riquezas, que debieran repartirse con equidad y justicia, ya no apelan en nuestros países latinoamericanos a las fuerzas militares que les garantizaron su dominación, mediante el terrorismo de estado. Ahora, utilizan las mismas herramientas de las instituciones democráticas para violar las leyes, imponer su modificación y acomodar los procesos políticos a sus exclusivos intereses, especialmente mediante la manipulación de los poderes judiciales y legislativos. Lo sufrieron Paraguay, Brasil, Ecuador, Bolivia y también nuestro país, favorecidos por los grandes medios de comunicación que terminan imponiendo como sentido común la sensación de que la democracia no nos sirve, ni es útil para resolver los graves problemas de desigualdades sociales que aquejan a las mayorías populares.

La memoria de un dirigente social y sindical, como René Salamanca, que además asumió una activa militancia política, como tantas y tantos otras y otros eliminados por el terrorismo de estado, nos interpela a no quedarnos en el recuerdo del pasado, sino a mirar las nuevas realidades sociales, económicas, culturales y políticas, para debatir, proponer y realizar acciones transformadoras para justicia y dignidad de los empobrecidos.

Córdoba, marzo 2021
Luis M. Baronetto / CTL